



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/C.12/1996/SR.45
5 de diciembre de 1996

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

15^a período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 45^a SESIÓN

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el viernes 29 de noviembre de 1996, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. ALSTON

ÍNDICE

CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL
DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (continuación)

Proyecto de Protocolo Facultativo (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y además incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas.

CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (tema 3 del programa)
(continuación)

Proyecto de Protocolo Facultativo (continuación) (E/C.12/1996/CRP.2/Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros que no han podido hablar en la sesión anterior a formular observaciones de carácter general sobre el informe revisado que él ha redactado acerca del proyecto de protocolo facultativo del Pacto (E/C.12/1996/CRP.2/Add.1). Después, el Comité podrá volver a tratar la cuestión de la conveniencia de que en el proyecto de texto figure una referencia a un procedimiento de presentación de denuncias entre Estados.

2. La Sra. TAYA dice que no está a favor de que se apruebe el proyecto de protocolo facultativo en su actual redacción por dos motivos principales: en primer lugar, porque no aborda la importantísima cuestión de las violaciones graves, masivas y consecutivas de los derechos económicos, sociales y culturales en los países en desarrollo. En segundo lugar, porque el proyecto de texto no tiene plenamente en cuenta la posibilidad -que se contempla en los artículos 22 y 23 del Pacto- de señalar determinadas cuestiones a la atención de otros órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas, a propósito de la formulación de sus políticas, a fin de que se apliquen con más eficacia los derechos que el instrumento consagra. La oradora pone en entredicho la conveniencia de que exista un protocolo cuyo ámbito de aplicación sea tan limitado y que además se base tan estrictamente en el primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si bien los derechos civiles y políticos están inextricablemente vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales, los medios para hacer que se pongan en práctica no son necesariamente los mismos.

3. El Comité ya ha mejorado sus procedimientos de examen de los informes de los Estados Partes y de audiencia de las organizaciones no gubernamentales. Las aportaciones de un amplio abanico de organizaciones no gubernamentales sobre cuestiones generales y casos más concretos le es sumamente valiosa al Comité en su diálogo con los países que presentan informes y para redactar observaciones finales no vinculantes. Habida cuenta de los éxitos alcanzados hasta ahora, merecería la pena estudiar la posibilidad de mejorar esos procedimientos en lugar de adoptar un protocolo facultativo, lo cual ofrecería la ventaja de abarcar a todos los Estados Partes en el Pacto y toda la gama de derechos que el Pacto contempla. Sería además una alternativa más sencilla y que llevaría menos tiempo.

4. A la oradora le preocupan hondamente las limitaciones presupuestarias de las Naciones Unidas y la necesidad de hallar la manera más eficaz de hacer aplicar el Pacto para poner fin a las violaciones más graves y dice temer que la existencia de un protocolo facultativo sólo sirva para duplicar y complicar los procedimientos ya existentes. Además, el procedimiento sobre denuncias entre Estados plantea problemas de carácter práctico y jurídico. Las violaciones más graves de los derechos a que se refiere el Pacto son consecuencia a menudo de las políticas de desarrollo de las organizaciones de las Naciones Unidas, de instituciones financieras como el Banco Mundial y de los propios países

receptores, por cómo emplean la ayuda extranjera bilateral y multilateral. El procedimiento de formulación de denuncias no se puede aplicar a instituciones como el Banco Mundial, que no es parte en el Pacto. En cuanto a la ayuda bilateral, no parece adecuado presentar una denuncia contra el país donante. Ahora bien, si se determina que la denuncia se refiere a órganos como los citados, acaso las recomendaciones que ulteriormente se formulen podrán ser dirigidas directamente a ellos, procedimiento que respondería a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Pacto.

5. La Sra. JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO dice que la declaración de la Sra. Taya ha planteado varias cuestiones interesantes en torno al desarrollo y la asistencia financiera, a las que el Comité debe prestar la debida atención, pero que ello no obsta en modo alguno para que se apruebe el proyecto de protocolo facultativo.

6. El Sr. GRISSA dice que no se le oculta que muchos miembros consideran prematuro aprobar un protocolo facultativo. El Comité está dedicando mucho tiempo a una cuestión que no cuenta con el respaldo de todos los miembros. Suscribe los argumentos expuestos por la Sra. Taya en contra de la aprobación del proyecto de protocolo facultativo.

7. La Sra. BONOAN-DANDAN dice que es totalmente inaceptable la forma de actuar del Comité. Debe poner en práctica su decisión anterior de aprobar un proyecto de protocolo facultativo en el actual período de sesiones.

8. El PRESIDENTE dice que al Comité le será difícil, en las circunstancias actuales, no poner en práctica su decisión de presentar un proyecto de protocolo facultativo a la Comisión de Derechos Humanos, pues la Conferencia Mundial de Derechos Humanos asumió el tema, y la propia Comisión fue informada de que el Comité redactaría un texto definitivo a finales del actual período de sesiones. Ni que decir tiene que en el informe que se presente a la Comisión se mencionará cualquier opinión discrepante sobre esta tarea considerada en conjunto o, como en el caso del Sr. Grissa, acerca de aspectos más concretos.

9. Su respuesta a las palabras de la Sra. Taya es que el proyecto de protocolo facultativo no tiene por objeto dar una solución global, pues, para ello, el Comité dispone de distintos procedimientos. No cabe duda de que la Sra. Taya ha estado muy acertada al alentar al Comité a centrarse en las actividades de los organismos internacionales de desarrollo que han dado buenos resultados, y es de esperar que se prosigan esos esfuerzos. Ahora bien, el Comité no puede esperar que órganos de esa índole estén de acuerdo en verse sometidos legalmente a un procedimiento de presentación de denuncias.

10. La Sra. Taya ha atribuido gran importancia a la cuestión de las violaciones graves, pero es de sobras conocido que, cuando tienen lugar, los correspondientes Estados Partes a menudo omiten informar al respecto y no es probable que cumpliera lo dispuesto en un protocolo facultativo. Además, todo procedimiento que se centrara en esas violaciones sería en la práctica bastante discriminatorio, pues apuntaría fundamentalmente a los países en desarrollo, en los que suelen suceder esas violaciones.

11. El objetivo fundamental del protocolo facultativo es que el Comité pueda elaborar un cuerpo de jurisprudencia; de ese modo, aunque un caso concreto considerado pudiera referirse únicamente a un Estado Parte o a un puñado de

personas, a la larga las decisiones del Comité podrían tener efectos multiplicadores. Los objetivos subrayados por la Sra. Taya son sin duda alguna importantes, pero la mayoría de ellos se pueden alcanzar por otros medios y, en cambio, hay otros objetivos esenciales que únicamente se podrán alcanzar si se aprueba un protocolo facultativo.

12. El Sr. SIMMA suscribe las observaciones del Presidente. El Comité se ha comprometido a finalizar su proyecto de protocolo facultativo en el actual período de sesiones. El orador recuerda que la señora Taya había mencionado antes la posibilidad de formular propuestas por separado, lo cual podía dar lugar a otro protocolo. Así pues, acaso lo mejor fuese estudiar por separado sus propuestas una vez que el Comité haya acabado de examinar el proyecto de protocolo facultativo de que ahora se trata.

13. El Sr. ÁLVAREZ VITA dice que hay que felicitar a la Sra. Taya por tener la valentía de decir lo que piensa. Él por su parte se abstendrá de abordar el fondo de la declaración de la Sra. Taya y se limitará a decir que ésta ha captado plenamente lo que a juicio de muchos miembros es el meollo de la cuestión.

14. El PRESIDENTE propone que el Comité vuelva a la cuestión del procedimiento de denuncias entre Estados y pregunta por las conclusiones de las consultas oficiosas al respecto.

15. El Sr. ÁLVAREZ VITA dice que, aunque no ha variado su posición inicial sobre el procedimiento de denuncias entre Estados, no desea oponerse al consenso alcanzado por el Comité. En el acta resumida pertinente figurarán fidedignamente las distintas opiniones expresadas sobre el tema. Una vez dicho esto, su preocupación principal es que el Comité no está avanzando con suficiente rapidez en lo tocante al protocolo facultativo para mantenerse al ritmo de los acontecimientos en el terreno de los derechos humanos.

16. Respondiendo a una pregunta de la Sra. TAYA, el PRESIDENTE recuerda el acuerdo alcanzado anteriormente por el Comité, según el cual, aunque conveniente, no es necesario alcanzar un consenso: en el informe sobre el proyecto de protocolo facultativo figurará toda discrepancia que hayan manifestado los miembros, ya sea por separado o algún grupo de miembros, y se expondrán las distintas opciones.

17. La Sra. TAYA propone someter el tema a votación nominal y que en el informe del Comité a la Comisión figuren las opiniones de los miembros.

18. El PRESIDENTE señala que el acta resumida en la que se recojan los debates del Comité sobre el tema estará a disposición de los miembros de la Comisión y de cualesquiera otras partes interesadas. Si el informe del Comité a la Comisión contuviese datos tan pormenorizados, probablemente sobrepasaría el límite de páginas fijado a los documentos de ese tipo. Algo más importante aún es que una votación nominal socavaría considerablemente el esprit de corps que hasta ahora ha prevalecido en el Comité y sentaría un precedente desafortunado para un órgano creado en virtud de los tratados de derechos humanos.

19. La Sra. BONOAN-DANDAN, a quien respalda la Sra. JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO, insta a los miembros a evitar la votación y esforzarse por llegar a un consenso.

20. El Sr. GRISSA dice que en una sesión anterior había dejado suficientemente clara su posición respecto a la cuestión del consenso. Se abstendrá de hacer ninguna observación más hasta que concluya el debate, pero entonces solicitará que se proceda a votación y se expresará en contra de la opinión generalmente favorable del Comité a propósito del proyecto de protocolo facultativo.

21. Tras un debate de procedimiento, en el que intervienen el Sr. SIMMA, el Sr. CEAUSU, el Sr. KOUZNETSOV, el Sr. ÁLVAREZ VITA, el Sr. ADEKUOYE, el Sr. WIMER ZAMBRANO y el Sr. THAPALIA, el PRESIDENTE observa que parece haberse llegado a un acuerdo acerca de que el Comité debe seguir examinando el informe revisado. Al parecer, también se ha decidido que en el proyecto de protocolo facultativo no se incluya una disposición relativa a un procedimiento sobre denuncias entre Estados. En su informe, el Comité puede decir que ha analizado los pros y los contras de ese procedimiento y que ha decidido no recomendar su inclusión; si no, puede no hacer mención de ello.

22. El Sr. SIMMA dice que está a favor de que se indiquen los motivos por los que no se incluye una disposición sobre un procedimiento entre Estados.

23. El Sr. WIMER ZAMBRANO observa que actuando de ese modo se reiniciaría el debate. En el informe no se deben incluir los motivos, y los interesados en conocerlos pueden leer el acta resumida.

24. En respuesta a una sugerencia del Sr. SIMMA, el PRESIDENTE dice que la solución más sencilla sería que el Comité citase el párrafo 12 del informe revisado y luego, remitiendo al acta resumida correspondiente, dijera que ha debatido la cuestión y decidido en contra de que se incluya esa disposición.

25. El Sr. ÁLVAREZ VITA dice que habría que hacer lo mismo respecto de las otras partes del proyecto de protocolo facultativo para evitar cualquier desequilibrio y propone que se adopte una decisión respecto de cualquier otro texto explicativo que se pudiera considerar necesario.

26. El PRESIDENTE dice que, si no se formula ninguna objeción, considerará que el Comité desea adoptar ese procedimiento. En el caso actualmente examinado, propone que el informe incluya el texto del párrafo 12 del informe revisado, junto con las adiciones que ya ha mencionado.

27. Así queda acordado.

28. El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre la sección del informe revisado relativa al preámbulo del protocolo facultativo propuesto (párrs. 14 y 15). Llama la atención acerca de la propuesta formulada el día anterior de que se incluya una cita concreta del párrafo 1) del artículo 2 del Pacto en el que se recuerda la índole de las obligaciones a que los Estados se comprometen al ratificar el Pacto.

29. El Sr. MARCHÁN ROMERO propone varias enmiendas al proyecto de texto del preámbulo. Además de una referencia al párrafo 1) del artículo 2 del Pacto, el preámbulo debería incluir un párrafo en el que se subraye: que la posibilidad de presentar denuncias relativas a violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales por los sujetos de esos derechos es un recurso necesario para garantizar el pleno ejercicio de esos derechos. Además, la palabra "capacitar" (en la versión española) que figura en el último párrafo debe ser

sustituida por la palabra "facultar", y se debe invertir el orden del primero y el segundo párrafos, pues el segundo es el más amplio de los dos.

30. El Sr. SIMMA dice que suscribe esas enmiendas, pero que preferiría que en el texto en inglés se dejara la palabra "enable".

31. El Sr. ÁLVAREZ VITA también apoya las modificaciones, pero expresa dudas sobre si "facultar" sería la palabra más apropiada en español. También pone en entredicho el empleo de la palabra "reconocía" en el primer párrafo, pues a su juicio debería decirse "reconoció".

32. La Sra. JIMÉNEZ BUTRAGUÑO dice que también ella está de acuerdo con las modificaciones propuestas por el Sr. Marchán Romero y dice, además, que en el preámbulo se podría incluir una referencia a la observación general mencionada por el Sr. Ceausu.

33. El Sr. WIMER ZAMBRANO propone que los miembros de habla española del Comité se reúnan de manera no oficial para decidir la redacción en español más adecuada. Se podría utilizar notas a pie de página para las explicaciones que fuese menester. En el segundo párrafo, se podría sustituir la palabra "Convencidos" por otra como, por ejemplo, "Reafirmando".

34. El PRESIDENTE dice que, si no se formula ninguna objeción, entenderá que el Comité desea aprobar esas propuestas, en el entendimiento de que se revisará la redacción del texto en español. El informe indicará que, en el curso de sus debates, el Comité ha convenido en incluir varios párrafos adicionales dentro del preámbulo.

35. Así queda acordado.

36. El PRESIDENTE, remitiendo a los miembros a la sección del informe revisado relativa al reconocimiento de la competencia del Comité, invita a formular observaciones sobre la primera cuestión, esto es, si el procedimiento de presentación de denuncias debe aplicarse a situaciones personales o colectivas, o a ambas (párrs. 17 y 18).

37. El Sr. SIMMA dice que hubiese preferido que el texto en conjunto hubiese sido ordenado por artículos, cada uno de los cuales fuese seguido por un comentario. Se debe tener cuidado en no implicar ni afirmar una obligación allá donde no hay ninguna (como sucede con la palabra "obligar" de la última frase del párrafo 17). La cuestión de si el procedimiento de presentación de denuncias debe ocuparse de situaciones personales o colectivas, o de ambas, es fundamental. El orador dice que está a favor de que se trate de situaciones personales, pero que si el Comité se decantase por un procedimiento similar al que contempla la Carta Social Europea, habría que modificar todas las propuestas ulteriores del documento presentado por el Presidente, pues éste se basa en el precedente del primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

38. El PRESIDENTE dice que está de acuerdo en cierta medida con el orador anterior, pero que si el Comité se inclina por las situaciones colectivas, todavía habrá que examinar algunas de las cuestiones pendientes en el resto del borrador.

39. El Sr. MARCHÁN ROMERO dice que el procedimiento debería referirse tanto a situaciones personales como colectivas, si bien es menester disipar los temores de que el órgano que se ocupe de tramitar las denuncias pudiera verse sumergido por una avalancha de denuncias personales relativas, por ejemplo, a situaciones de desempleo o epidemias, en particular en los países en desarrollo. Habrá que definir determinados requisitos procedimentales para abarcar todos los tipos de denuncias.

40. El Sr. ÁLVAREZ VITA dice que la asunción de las situaciones personales correspondería al objetivo básico del protocolo propuesto, que es proteger a la persona humana. Por consiguiente, no ve motivo alguno para no permitir la presentación de denuncias personales además de colectivas.

41. La Sra. JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO está de acuerdo con los oradores anteriores. No cabe duda de que el Protocolo Adicional de la Carta Social Europea es una excepción al no permitir la presentación de denuncias personales.

42. El Sr. KOUZNETSOV propone elaborar un procedimiento de tramitación de ambos tipos de denuncias: el Pacto contempla en algunos casos los derechos de la persona y en otros lugares derechos colectivos, como los derechos sindicales.

43. La Sra. BONOAN-DANDAN dice que, según su experiencia, la admisión de denuncias colectivas sería lo más adecuado, pues el Pacto abarca una gama de derechos que corresponden a grupos colectivos. Ahora bien, estaría de acuerdo con la opinión de que el Comité no debe cerrar la puerta a una persona si hay derechos que corren peligro.

44. El Sr. SIMMA dice que hay en potencia una confusión entre el derecho a formular una denuncia colectiva y los derechos de que disfrutaban las personas pertenecientes a una "colectividad". Por citar uno de los casos que él había planteado a propósito del informe sobre Hong Kong, una persona como la que había recibido gases lacrimógenos y había caído enferma en un centro de detención debería tener derecho a formular una denuncia personal. Otro tanto cabe decir de los reclusos de un centro de detención, que tendrían derecho a formular una denuncia colectiva. El orador dice que puede aceptar las opiniones conforme a las cuales se debe permitir formular denuncias a grupos, a condición de que -como se dice en el texto propuesto para el artículo 1- haya grupos "que aleguen ser víctimas de una violación" (párr. 38).

45. El Sr. CEAUSU dice que preferiría que el protocolo propuesto se refiriese únicamente a las comunicaciones de personas, pues los derechos consagrados en el Pacto se ejercen individualmente, o en común con otras personas de la sociedad.

46. El PRESIDENTE dice que entiende que el Comité está a favor de seguir adelante con la idea de un procedimiento que abarque probablemente tanto denuncias personales como colectivas y que, en cualquier caso, se opone a un procedimiento que sea únicamente colectivo, similar a lo dispuesto en el Protocolo Adicional de la Carta Social Europea. Considera que el Comité desea indicar en el informe que está al corriente del precedente sentado en la Carta Social Europea, pero que se ha llegado a un claro consenso a propósito de que no es el mejor procedimiento a seguir en el caso de que se trata.

47. Así queda acordado.

48. El PRESIDENTE invita al Comité a formular observaciones sobre la cuestión planteada en los párrafos 19 a 21 acerca de si el protocolo propuesto debe referirse a una "violación" o al incumplimiento por el Estado Parte de sus obligaciones en virtud del Pacto. Hasta ahora, los debates se han inclinado hacia la primera formulación.

49. El Sr. WIMER ZAMBRANO a quien apoya la Sra. JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO, dice que se deben conservar ambas frases, pues en el futuro darían más flexibilidad al Comité para evaluar situaciones de distinta gravedad y relativas a distintos tipos de derechos.

50. El Sr. SIMMA, quien observa la necesidad de aclarar qué diferencia jurídica hay entre ambas formulaciones, dice que entiende que el incumplimiento de obligaciones no equivale forzosamente a una violación. Debe haber otros elementos para que pueda decirse que se ha producido una violación.

51. El PRESIDENTE dice que no presentar un informe o no ajustarse a una decisión concreta del Comité serían ejemplos de incumplimiento de obligaciones.

52. El Sr. SIMMA expresa su apoyo al término "violación", porque encajaría lógicamente con las referencias que más adelante se hacen en el texto a los "recursos internos".

53. El Sr. MARCHÁN ROMERO dice que aprecia en lo que valen los eufemismos, pero que el protocolo propuesto tiene por único objeto constituir un recurso en caso de "violación" de un derecho consagrado en el Pacto. Si no se utiliza esa palabra, el Comité no podrá hablar de indemnización.

54. El Sr. KOUZNETSOV dice que el protocolo propuesto debe ocuparse únicamente de violaciones, como las resultantes del incumplimiento deliberado del Pacto, pues, a fin de cuentas, ese incumplimiento puede deberse también a la incapacidad de atender unas obligaciones por ejemplo, por falta de recursos, lo cual exoneraría temporalmente de responsabilidades a un Estado.

55. El Sr. WIMER ZAMBRANO dice que es difícil percibir el propósito de un Estado que incumple una obligación determinada. En ocasiones, el incumplimiento es de poca monta y, por consiguiente, no se aplica la palabra "violación". Todas las religiones que creen en el pecado distinguen entre pecados mortales y veniales. Hay distintos grados de violación, desde actos de comisión a actos de omisión, y el Comité debe tener latitud para utilizar cualquiera de esas formulaciones para matizar su posición según la índole y el grado de la violación.

56. El Sr. MARCHÁN ROMERO dice que ya existe un foro para ocuparse de los "pecados veniales": el examen que el Comité efectúa de los informes de los Estados Partes, momento en el que se puede observar actos como el incumplimiento del Pacto o el de la obligación de presentar informes. El protocolo facultativo tiene por finalidad proporcionar recursos frente a la violación de los derechos de una persona, respecto de lo cual en la actualidad el Comité no está facultado para actuar.

57. El Sr. SIMMA dice que, en tanto que en el Pacto se enuncian derechos y obligaciones, hay algunas obligaciones de los Estados que no entrañan un derecho correlativo de la persona. No tendría sentido, por ejemplo, que una persona

pudiera presentar una denuncia por el incumplimiento de un Gobierno de la obligación de presentar informes. Por otra parte, hay cuestiones de importancia para una persona que pueden parecer insignificantes para un Estado. Está de acuerdo con el Sr. Wimer Zambrano en que lo que ha sucedido es que simplemente no han interpretado bien las palabras que cada cual ha utilizado.

58. El Sr. CEAUSU dice que sería más productivo que los miembros dedicasen menos tiempo a debates teóricos y propusieran más modificaciones concretas que considerasen necesarias.

59. El Sr. SIMMA dice que el debate muestra los inconvenientes de analizar el proyecto paso a paso, pues todas las partes del texto están interrelacionadas y, por ejemplo, el proyecto de artículo 1 es de importancia fundamental para el preámbulo.

60. El PRESIDENTE propone que el Comité aplaze la decisión de si mantiene o no la palabra "violación", cuestión que puede aclararse conforme avance el debate. Entretanto, el Comité podría examinar las tercera y cuarta cuestiones (párrs. 22 a 25). Sobre la tercera parte ya se ha decidido, en el sentido de que todos están conformes en que el procedimiento de comunicaciones no debe limitarse a las personas, sino incluir además los grupos. La cuarta cuestión se refiere a la capacidad que una persona o un grupo debe tener para poder formular una denuncia. El Comité de Derechos Humanos interpreta el artículo 1 del primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el sentido de que permite intervenir ante el Comité a una organización no gubernamental que actúe en nombre de varias víctimas; ahora bien, una organización de esa índole que no tuviese un vínculo directo no podría presentar una comunicación. Invita a que se formulen observaciones acerca de si en el proyecto de artículo 1 debe mantenerse la expresión "individuos o grupos".

61. El Sr. SIMMA dice que es una cuestión importantísima dado que un Estado tiene a menudo menos temor de una persona que de una organización no gubernamental vigilante. En su redacción actual, el proyecto de artículo 1 da a entender que los miembros de un grupo deben ser víctimas de una violación. Si se adoptase la fórmula "que intervenga en nombre de personas o grupos", se correría el riesgo de que una organización no gubernamental pudiese asumir la causa de una persona, sin su autorización, con consecuencias destructivas. Solicita, por consiguiente, una interpretación autorizada de lo que querría decir la modificación propuesta.

62. El PRESIDENTE dice que el Comité de Derechos Humanos sigue la práctica de no aceptar una denuncia de una organización no gubernamental en nombre de una supuesta víctima, salvo que pueda demostrar que ha obtenido el consentimiento de la víctima o de los próximos a ella. Está de acuerdo en que la redacción del proyecto de artículo 1 puede considerarse restrictiva, pero la esencia de la disposición consiste en que una o más personas tienen que ser partes en la denuncia. El Comité desarrollará presumiblemente una práctica similar a la del Comité de Derechos Humanos el cual ha razonado que no se debe recompensar a un gobierno draconiano por mantener incomunicada a una víctima, sin dar a ésta la posibilidad de ser representada.

63. El Sr. MARCHÁN ROMERO se inclina a pensar que el texto no debe diferenciar entre grupos y organizaciones no gubernamentales y que se debe conservar la redacción actual. Desde la perspectiva del procedimiento, no hay motivo alguno

para que unas personas o unos grupos no puedan habilitar a otros para que los representen, de la misma manera que un abogado represente a su cliente ante el tribunal.

64. El Sr. SIMMA está de acuerdo, pero establece una distinción entre la representación de una víctima por un abogado y por una organización no gubernamental, que, según su experiencia, no cabe caracterizar nunca como víctima. En tal caso, la redacción del proyecto de artículo 1 sería demasiado limitada, pues se aplicaría únicamente a grupos realmente tratados injustamente.

65. El PRESIDENTE dice que, por muchas enmiendas que se hagan, siempre será menester que el Comité interprete el texto. El Comité de Derechos Humanos ha tenido que decidir en repetidas ocasiones qué interpretación da al texto, por lo demás sumamente claro, del primer Protocolo Facultativo.

66. El Sr. SIMMA señala que el primer Protocolo Facultativo no menciona a los grupos y, que justamente por ese motivo, el Comité de Derechos Humanos ha podido interpretar con más latitud sus disposiciones. Si se incluyese una referencia a grupos, lo único que se conseguiría, en todo caso, sería atar de pies y manos al Comité.

67. El PRESIDENTE dice que, si realmente se entiende que la actual redacción no permitiría a, por ejemplo, Amnistía Internacional acudir al Comité en nombre de una o dos personas de un grupo específico, se podría resolver el problema modificando la cuarta línea de manera que dijese: "y que uno o más de cuyos miembros aleguen ser víctimas...".

68. El Sr. SIMMA dice que la propuesta no soluciona totalmente el problema pues, si, por ejemplo, dos sindicalistas fuesen atacados en la calle, sería difícil determinar si sus actividades sindicales habrían sido el motivo del ataque. De igual modo, los miembros de un grupo no podrían formular una denuncia en nombre de otros miembros del grupo. El orador dice que puede aceptar la propuesta, pero advierte de que la redacción puede ser restrictiva.

69. El Sr. MARCHÁN ROMERO dice que es importante dejar claro que los miembros de un grupo, que no sean personalmente víctimas, pueden formular una denuncia en nombre de otros miembros que sí lo sean. Apoya la modificación propuesta por el Presidente.

70. El Sr. WIMER ZAMBRANO dice que el Comité corre el riesgo de complicar algo que es sencillo. El texto actual es claro y corresponde al mandato del Comité, pues, después de todo, uno o dos miembros de un grupo pueden formular una denuncia a título personal.

71. La Sra. BONOAN-DANDAN dice que la redacción actual excluiría a cualquier organización no gubernamental, porque no podría ser víctima. Ahora bien, sucede que la mayoría de las víctimas no pueden recurrir directamente al Comité, aunque conozcan su existencia. Su causa puede ser defendida únicamente por organizaciones no gubernamentales, la importancia de cuya labor debe, por consiguiente, recoger el texto.

72. El PRESIDENTE propone modificar la tercera línea para que diga: "de individuos o grupos que intervengan en nombre de individuos" con lo que se atenderían todas las objeciones formuladas.

73. La Sra. JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO dice que hay dos tipos de grupos: los que son víctimas como grupos, los que son víctimas a título personal, pero formulan una denuncia conjuntamente, y los que actúan en nombre de otros. El procedimiento debe tener en cuenta a todos ellos.

74. El Sr. WIMER ZAMBRANO propone resolver fácilmente el problema introduciendo "o que representen a víctimas" después de la palabra "víctima".

75. El Sr. CEAUSU dice que se puede allanar las preocupaciones del Comité modificando el proyecto del párrafo 1 del artículo 2, añadiendo la frase "También podrá presentar una comunicación en su nombre cualquier organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos.". En otras palabras, que la cuestión debe ser considerada una cuestión de procedimiento, no un derecho en sí mismo.

76. El Sr. SIMMA apoya la propuesta, que aclara la situación aún más que la modificación propuesta por el Sr. Wimer Zambrano. Ahora, bien, en algún lugar del texto debe figurar una declaración sobre la admisibilidad de un grupo que formule una denuncia en nombre de una persona, a fin de velar por que disponga de la obligada autorización.

77. El PRESIDENTE propone celebrar más consultas oficiosas y aplazar la decisión a una sesión ulterior.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.